

COMENTARIOS

LA CRISIS GUBERNAMENTAL: UN PASO ADELANTE Y DOS ATRAS

El 27 de enero se escenificó en la Asamblea Constituyente un hecho aparentemente sin importancia. Las fracciones de diputados del PCN (línea Molina Martínez), Democracia Cristiana, Acción Democrática y algunos autónomos simpatizantes de PAIS, se constituyeron en pleno sin la presencia de la mayoría de directivos que, de acuerdo al reglamento interno, debían presidir la reunión.

El presidente de la constituyente, Mayor Roberto D'Aubuisson, momentos antes se retiró del edificio y dejó claramente establecido que no había **quorum** y, en consecuencia, no podía llevarse a cabo ninguna sesión legal. Tras discusiones acaloradas y con el respaldo de los secretarios generales de los partidos Demócrata Cristiano, Acción Democrática y Conciliación Nacional, 39 diputados decidieron ante y por sí constituirse en asamblea general. Observaron que para llevar a cabo el pleno se requerían, por lo menos, cinco directivos. El obstáculo legal fue resuelto mediante la modificación del reglamento interno de la Asamblea Constituyente, en base al principio universal de que los representantes están facultados para aprobar, reformar o derogar las disposiciones reglamentarias cuando así lo decidiese la mayoría. Inmediatamente después de la reforma del caso procedieron a celebrar la sesión del día con la agenda propuesta, entre cuyos puntos se hallaba la ratificación o no del Dr. Napoleón Ernesto Cárdenas como Ministro de Salud Pública, cargo que estaba en poder de ARENA y que ahora, a instancia del Presidente de la República, pasaba al partido Acción Democrática.

El hecho adquiere relevancia en la vida política del país, pues rompe el equilibrio precario del gobierno de unidad nacional impuesto en mayo de 1982. Al instalarse la constituyente, luego de unirse los partidos de derecha y ultra derecha, no había acuerdo respecto a quien debería desempeñar provisionalmente la presidencia de la República. El alto mando de la Fuerza Armada, a través del Gral. José Guillermo García, llamó a todos los partidos participantes en las elecciones del 28 de marzo para que se unieran en una línea común, a fin de establecer una base civil que respaldara la acción militar contra la insurgencia y se pudieran continuar las reformas iniciadas en octubre de 1979.

Las tensiones y resistencias a conformar un gobierno unitario pronto emergieron a la luz pública, Fruto de cabideos, en los que tuvo singular importancia la embajada norteamericana en San Salvador, se designó al Dr. Alvaro Magaña para ocupar la primera magistratura. Ello fue posible gracias a una alianza entre la Democracia Cristiana con 24 diputados, el PCN con 14 y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con 19. El Partido Popular Salvadoreño, con un diputado apenas si se adhirió al arreglo político, como lo hizo Acción Democrática con sus dos representantes. Magaña salió electo con 59 votos, con la abstención del Mayor D'Aubuisson que no quiso comprometerse públicamente, aunque "negoció" el apoyo de su partido para que la "propuesta" de la Fuerza Armada triunfara en un país agobiado por la guerra civil, con grandes vacíos de poder, y en una crisis que desde princi-

pios de la década de 1970 se ha visualizado como estructural y no de personalidad o meros recambios en la cúpula de la administración pública.

Los sucesos del 27 de enero tienen una significación histórica por dos razones: 1) se dan pasos distintos, por parte de los diputados, en cuanto al compromiso inicial de mayo de 1982 y se rompe la unidad del Pacto de Apaneca suscrito el 3 de agosto de ese año. Queda claro, en cierto modo, que los cargos del poder ejecutivo no se seguirán "repartiendo" en forma proporcional entre los partidos mayoritarios, como se acordó a espaldas del pueblo y 2) se revela, como dato incuestionable, una nueva alianza, una conformación de poder en la constituyente diferente a la que venía hegemonizando desde que se instaló la Asamblea en abril de 1982.

El paso de los diputados disidentes de D'Aubuisson responde a cambios sustantivos en la conducción del gobierno. En primer lugar, los altos mandos de la Fuerza Armada, y con ellos el Presidente Magaña, están inconformes con la situación de varios ministros de Arena, a los que en diciembre de 1982 se les pidió la renuncia, con vistas a que el ejecutivo pudiera moverse con mayor coherencia. ARENA, no sólo está perdiendo su propia base social de votantes, sino el respaldo de oficiales que laboran en oficinas y cuerpos de seguridad. ARENA, desde fines de septiembre del año pasado, se ha vuelto antipática a los asesores norteamericanos en el área y está en proceso de "desmoronarse" por incumplimiento de sus promesas electorales. La vinculación que los areneros habían logrado con el (PCN) se ha desnaturalizado, al dividirse este partido en tres fracciones independientes: el PCN tradicional o auténtico controlado por el industrial Raúl Molina Martínez, PAIS al frente del Coronel y Dr. Roberto Escobar García y MERECEN, nueva organización política dirigida por el Dr. Ramón Rosales y Rosales. La alianza natural de ARENA y PCN concluyó, ante esquemas y perspectivas de solución diferentes y hasta contrapuestos. El rompimiento recuerda las posturas del asesinado líder sindical Rafael Rodríguez González a manos de la ultra derecha y quien fuera ponente de la pacificación y democratización por vías racionales. Este es el punto de inflexión de mayor importancia: el desplazamiento del PCN a un centro democrático que, en la práctica, se traduce en una toma de decisión conjunta con la Democracia Cristiana y Acción Democrática de Fortín Magaña.

Explicados estos antecedentes, de mayo a diciembre de 1982, es fácil percibir que el gobierno de unidad nacional no ha logrado estabilizar su gestión. Las limitaciones que le impuso el régimen de excepción, de acuerdo a los decretos constitucionales 3 y 6, ataron de pies y manos al Presidente Magaña, obligándolo a una ratificación insólita del gabinete por parte de la constituyente. Y, sobre todo, al arbitrio de una Asamblea de diputados bajo el control de fuerzas contrarias a cambios sociales y a soluciones políticas de riesgo calculado. El mérito de Magaña, en este caso, no es que no haya hecho nada, sino que haya evitado que ocurriera lo peor.

Con la nueva composición de votantes en la constituyente es probable que se pase a elaborar un verdadero programa de gobierno, se evidencie un perfil político más definido, y la actuación del ejecutivo sea consistente en la búsqueda de terminar con la guerra, democratizar al país y hallar los caminos de la reconciliación nacional. ARENA pesa menos en el ámbito social y sus simpatizantes en el ejército parecen disminuir, ante el hecho de que dicho partido no aporta soluciones reales en ningún campo. El derrumbe de D'Aubuisson de la presidencia de la constituyente no se produce por pura inercia; es obvio que de nada sirve presidir ni dirigir si el pleno, en su gran mayoría, va por otro rumbo. Hay que recordar la amenaza de D'Aubuisson de "renunciar" si los diputados de la DC, AD y PCN no se apegaban a la letra del Reglamento interno que, según el dirigente de ARENA, no podía cambiarse. Al exigirle los demócratas cristianos a D'Aubuisson la definición de si se iba o no de la directiva, si se exoneraba o no de diputado, simplemente contestó que se quedaba hasta la aprobación de la nueva Carta Magna, lo que le ha restado popularidad entre sus seguidores. El espectáculo en la constituyente es de poca seriedad. O valen los principios o no.

Así, la renuncia solicitada a los ministros en diciembre se une a la acción del Presidente Magaña de nombrar un secretario de estado ajeno al Pacto de Apaneca. Se vincula, además, a la desobediencia del Coronel Sigifrido Ochoa de no cumplir un destino obligatorio fuera del país, y se cierra virtualmente con la ratificación del Gral. José Guillermo García en su condición de Ministro de Defensa y Seguridad. La nueva alianza, si así puede calificarse, tiende a disminuir la influencia de los civiles y militares de corte totalitario, discrepantes de la posición "centrista" de Magaña y García.



Todos esos elementos confirman que la crisis gubernamental se ha superado por la vía del arreglo político. Un arreglo político que parece derivar hacia otras etapas: a) consolidación del gobierno de Magaña/Fuerza Armada; 2) constitución de un "centro democrático" como soporte civil del ala militar más moderada; 3) aislamiento del grupo de militares de línea dura; 4) continuación de la guerra contra el FMLN, bajo la estrategia trazada por García y Flores Lima; 5) aprobación de la nueva Constitución Política en 1983; 6) Llamamiento a elecciones presidenciales para marzo a abril de 1984 y 7) acercamiento con la izquierda no armada a manera de que concurra a las elecciones, sin dejar por ello de combatirla en el terreno militar.

Para los observadores, la crisis gubernamental como en otros momentos, da un paso adelante y dos atrás. Ello quiere decir que, mientras no se determinen claramente los agentes sociales del conflicto político-militar, la crisis no será superada. Si no se concluye que el conflicto tiene raíces estructurales que urge combatir con reformas económicas y sociales efectivas, el problema no será resuelto en su globalidad. No basta la buena voluntad y la retórica política, en tanto la oligarquía siga conspirando en la misma mesa de la "unidad" nacional. Una verdadera definición estaría en plantear y llevar a cabo una real apertura hacia la izquierda, tal como sucedió en España, Portugal, Venezuela, Ecuador, Bolivia y últimamente en Colombia, donde el gobierno conservador busca el entendimiento con las guerrillas sin que ello signifique claudicar en los principios o negociar el poder.

El paso adelante de los diputados del PCN, AD y DC y "autónomos" puede significar, a corto plazo, dos atrás si se dejan amedrentar por los grupos ultra-derechistas que no ven más allá del corredor, en una posición ahistórica, en defensa de los privilegios oligárquicos.

La construcción de un centro democrático abierto a la discusión y la polémica, afincado en principios en favor de las mayorías, puede ser el inicio de soluciones nuevas y modernas a la crisis de El Salvador.

C.M.D.